

**Asamblea General**

Distr. general
12 de febrero de 2015
Español
Original: inglés

Consejo de Derechos Humanos
Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria

**Opiniones aprobadas por el Grupo de Trabajo sobre
la Detención Arbitraria en su 71^{er} período de sesiones
(17 a 21 de noviembre de 2014)**

Nº 43/2014 (Israel)

Comunicación dirigida al Gobierno el 16 de septiembre de 2014

Relativa a: Ahmad Ishraq Rimawi

El Gobierno no ha respondido a la comunicación.

El Estado es parte en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, al que se adhirió el 3 de octubre de 1991.

1. El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria fue establecido en virtud de la resolución 1991/42 de la antigua Comisión de Derechos Humanos, que prorrogó y aclaró el mandato del Grupo de Trabajo en su resolución 1997/50. El Consejo de Derechos Humanos asumió el mandato en su decisión 2006/102 y lo prorrogó por tres años mediante su resolución 15/18, de 30 de septiembre de 2010. El mandato fue prorrogado por otros tres años mediante la resolución 24/7, de 26 de septiembre de 2013. De conformidad con sus métodos de trabajo (A/HRC/16/47, anexo), el Grupo de Trabajo transmitió al Gobierno la comunicación arriba mencionada.

2. El Grupo de Trabajo considera arbitraria la privación de libertad en los casos siguientes:

a) Cuando es manifiestamente imposible invocar fundamento jurídico alguno que la justifique (como el mantenimiento en reclusión de una persona tras haber cumplido su condena o a pesar de una ley de amnistía que le sea aplicable) (categoría I);

b) Cuando la privación de libertad resulta del ejercicio de los derechos o libertades garantizados por los artículos 7, 13, 14, 18, 19, 20 y 21 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y, respecto de los Estados partes, por los artículos 12, 18, 19, 21, 22, 25, 26 y 27 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (categoría II);

GE.15-02400 (S) 270415 280415



* 1 5 0 2 4 0 0 *

Se ruega reciclar



c) Cuando la inobservancia, total o parcial, de las normas internacionales relativas al derecho a un juicio imparcial, enunciadas en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en los instrumentos internacionales pertinentes aceptados por los Estados interesados, es de una gravedad tal que confiere a la privación de libertad carácter arbitrario (categoría III);

d) Cuando los solicitantes de asilo, inmigrantes o refugiados son objeto de detención administrativa prolongada sin posibilidad de examen o recurso administrativo o judicial (categoría IV);

e) Cuando la privación de libertad constituye una vulneración del derecho internacional por tratarse de discriminación por motivos de nacimiento, origen nacional, étnico o social, idioma, religión, condición económica, opinión política o de otra índole, género, orientación sexual, o discapacidad u otra condición, y lleva o puede llevar a ignorar el principio de igualdad de los derechos humanos (categoría V).

Información recibida

Comunicación de la fuente

3. El caso que se menciona a continuación fue comunicado al Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria como sigue.

4. Ahmad Ishraq Rimawi, estudiante palestino nacido el 12 de noviembre de 1994, fue detenido en la noche del 17 de noviembre de 2012 en el puesto de control militar de Atara, en Israel, por miembros del ejército israelí. El Sr. Rimawi viajaba en taxi con dos amigos, que también fueron detenidos en el puesto de control. Uno de ellos, ciudadano de los Estados Unidos de América de origen palestino, fue expulsado a los Estados Unidos. El otro, también ciudadano de los Estados Unidos y titular de un documento de identidad emitido por la Autoridad Palestina, fue puesto en libertad provisional pocos días después de su detención.

5. Según la fuente, los agentes militares no presentaron una orden de detención ni ninguna otra resolución de una autoridad pública. Tras su detención, el Sr. Rimawi fue interrogado durante dos días y acusado de "participar en actividades militares", lo cual negó.

6. El 17 de diciembre de 2012 se dictó una primera orden de detención administrativa de seis meses. Seguidamente, el Sr. Rimawi fue trasladado a la prisión de Ofer.

7. La fuente indica que el padre del Sr. Rimawi fue detenido el 15 de junio de 2001 y sigue en la cárcel.

8. El Sr. Rimawi fue detenido para ser interrogado en virtud de los artículos 31 y 285 de la Orden Militar N° 1651 (2009). Se dictaron otras dos órdenes de detención administrativa de seis meses, que expiraron el 16 de noviembre de 2013 y el 15 de mayo de 2014, respectivamente. Un agente de los servicios de inteligencia israelíes, miembro del Shabak, recomendó que se ordenara otra prórroga de seis meses el 15 de mayo de 2014. Su solicitud fue aceptada por un juez militar. La orden de detención administrativa de seis meses en virtud de la cual permanece recluso el Sr. Rimawi expirará el 14 de noviembre de 2014.

9. La fuente señala que todos los recursos presentados a los tribunales militares fueron desestimados. El abogado del Sr. Rimawi dirigió además dos peticiones al Tribunal Supremo, que también fueron desestimadas, después de que se dictaran las órdenes de detención administrativa primera y tercera. En la audiencia de revisión judicial relativa a la primera orden de detención administrativa, el juez del tribunal militar afirmó que ser menor de edad no confería inmunidad frente a la detención. Los tribunales se han negado a tomar

en consideración la edad del Sr. Rimawi o el hecho de que su detención administrativa le impide continuar sus estudios.

10. Según la fuente, los servicios de inteligencia israelíes no han aportado pruebas sustanciales o concretas contra el Sr. Rimawi. No han facilitado nueva información, pruebas ni materiales para justificar las prórrogas de la detención administrativa. El expediente de la causa del Sr. Rimawi contiene únicamente especulaciones acerca de los delitos que presuntamente ha cometido. Dado que el Sr. Rimawi fue detenido días después de su 18º cumpleaños, toda prueba presentada en su contra fue obtenida cuando todavía era menor de edad.

11. La fuente señala que el Sr. Rimawi, junto con otros 90 presos palestinos, inició una huelga de hambre indefinida el 24 de abril de 2014, en protesta por las continuas prórrogas de su detención administrativa. El Sr. Rimawi, ha soportado condiciones severas y sufrido castigos colectivos desde el inicio de su huelga de hambre, al igual que los demás huelguistas. Mientras permaneció en la prisión de Ktziot, se vio sometido a cacheos y redadas llevados a cabo de manera rutinaria por miembros de las fuerzas especiales israelíes fuertemente armados. Durante los cacheos, los presos en huelga de hambre eran transferidos a una jaula mientras esperaban a ser cacheados por una máquina. Los presos permanecían esposados las dos horas que solían durar los cacheos. Durante los primeros 15 días de la huelga de hambre los huelguistas se vieron privados de sal, nutriente esencial para la supervivencia durante una huelga de hambre.

12. El Sr. Rimawi permanece recluido en las celdas de aislamiento de Deikel que, según se informa, son reducidas (2 x 3 m) y están sucias, abarrotadas y desprovistas de productos de limpieza y de higiene personal.

13. La fuente señala que la detención administrativa es un procedimiento que permite a las fuerzas militares israelíes retener indefinidamente a los detenidos sobre la base de pruebas secretas, sin necesidad de formular cargos en su contra ni de permitirles comparecer en juicio. El 1 de mayo de 2010 entró en vigor la Orden Militar Nº 1651 (2009), por la que se codificaban una serie de órdenes dictadas previamente en lo que pasó a conocerse como el nuevo Código Penal. El Código Penal es una versión refundida de 20 órdenes militares dictadas desde 1967 en relación con la detención, la reclusión y el enjuiciamiento de una persona. El artículo 285 de la Orden Militar Nº 1651 ha reemplazado a la Orden Militar Nº 1591, en la que anteriormente se sentaban las bases de la detención administrativa.

14. La Orden Militar Nº 1651 faculta a los comandantes militares para recluir a personas durante períodos prorrogables de seis meses si tienen "argumentos razonables para suponer que la detención es necesaria para la seguridad de la zona o la seguridad pública". Según la fuente, es frecuente que las órdenes de detención se prorroguen al expirar o justo antes de expirar. Ese proceso puede repetirse indefinidamente. No hay un límite de duración máxima permitida de la detención administrativa de una persona.

15. Según la fuente, los motivos por los que una persona puede ser detenida con arreglo a la Orden Militar Nº 1651 no son claros, de modo que queda a discreción de los comandantes militares decidir qué se entiende por "seguridad pública" y por "seguridad de la zona". Las personas recluidas en virtud de una orden de detención administrativa no suelen ser informadas de los motivos de su detención, que tampoco se comunican a sus abogados. En la mayoría de los casos, las órdenes de detención administrativa son confirmadas para los períodos solicitados por el comandante militar. La mayor parte de los recursos interpuestos son desestimados en la práctica. Pese a que las órdenes de detención administrativa dictadas por comandantes militares israelíes están sujetas a revisión y ulterior apelación ante los tribunales militares, no se permite a los abogados acceder a la

información secreta que pesa contra sus clientes, con lo que ese derecho a revisión es ficticio.

16. La fuente sostiene que, como Potencia ocupante en la Ribera Occidental, Israel debe acatar las normas que rigen la ocupación, según las cuales solo se debe recurrir a la detención administrativa por "razones imperiosas" de seguridad (Convenio de Ginebra relativo a la Protección Debida a las Personas Civiles en Tiempo de Guerra, art. 78). Si bien el derecho internacional de los derechos humanos permite el uso limitado de la detención administrativa en situaciones de emergencia, las autoridades están obligadas a respetar ciertas normas básicas de la detención, que incluyen la celebración de una audiencia imparcial en la que el detenido pueda impugnar los motivos de su detención, de conformidad con el artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. La detención administrativa nunca debe utilizarse como medida sustitutiva de un enjuiciamiento penal en los casos en que haya pruebas suficientes en las que basar una condena.

17. La fuente considera que la encarcelación del Sr. Rimawi constituye una detención arbitraria y se inscribe en las categorías I y III de las categorías de detención arbitraria a las que se remite el Grupo de Trabajo cuando examina los casos que se le presentan.

18. La fuente alega que, si las autoridades israelíes tuvieran pruebas que justificaran la detención administrativa del Sr. Rimawi, podrían haber formulado cargos en su contra acogiéndose a órdenes militares y el Sr. Rimawi podría haber sido juzgado por un tribunal militar. La fiscalía israelí ha aducido que el Sr. Rimawi representa un riesgo no especificado para la seguridad, sin aportar pruebas que justifiquen su detención. El abogado del Sr. Rimawi no ha obtenido permiso para acceder a ninguna de las presuntas pruebas contra su cliente y no ha tenido vías para impugnar de manera efectiva la detención.

19. Según la fuente, los tribunales que se ocupan de la detención administrativa no pueden considerarse independientes o imparciales, ya que están integrados por personal militar sometido a la disciplina militar que depende de sus superiores para ascender. Además, los jueces y fiscales de los tribunales militares desempeñan sus funciones en la misma división del ejército israelí bajo la supervisión del mismo comandante.

20. La fuente señala que los amigos del Sr. Rimawi que fueron detenidos con él fueron liberados poco después, lo que demuestra que no representaban una amenaza para la vida o la seguridad de la nación. El recurso a las órdenes de detención administrativa en virtud del derecho internacional está estrictamente restringido a los casos de absoluta necesidad en los que peligre la vida de la nación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 del Convenio de Ginebra relativo a la Protección Debida a las Personas Civiles en Tiempo de Guerra (1949) y el artículo 4 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

21. La fuente concluye que el Sr. Rimawi ha sido privado arbitrariamente de su derecho a un juicio imparcial, garantizado por el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Ese derecho abarca los derechos de la persona a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley, a que la causa sea dirimida sin demora por una autoridad u órgano judicial competente, independiente e imparcial en una audiencia equitativa conforme a la ley, y a interrogar o hacer que se interroge a testigos de cargo.

22. Según la fuente, el Sr. Rimawi no dispone de vías dentro del sistema de tribunales militares de Israel para impugnar su detención de manera eficaz, y podría permanecer recluido indefinidamente.

Respuesta del Gobierno

23. El 16 de septiembre de 2014 el Grupo de Trabajo envió una comunicación al Gobierno de Israel en la que solicitaba información detallada sobre la situación en que se encontraba el Sr. Rimawi, las disposiciones legales que justificaban que siguiera recluido y la conformidad de dichas disposiciones con el derecho internacional. El Grupo de Trabajo lamenta que el Gobierno no haya respondido a las alegaciones que le ha transmitido.

24. Pese a no haber recibido información alguna del Gobierno, el Grupo de Trabajo considera que está en condiciones de emitir su opinión sobre la detención del Sr. Rimawi, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 16 de sus métodos de trabajo revisados.

Deliberaciones

25. Puesto que el Gobierno optó por no rebatir las veraces alegaciones *prima facie* presentadas por la fuente, el Grupo de Trabajo acepta la información de la fuente como veraz.

26. El Grupo de Trabajo considera que, en las causas relativas a una duración excesiva de la reclusión, la persona recluida deberá gozar de las mismas garantías que en las causas penales, incluso si se trata de una detención administrativa en virtud de la legislación nacional. A ese respecto, el Grupo de Trabajo recuerda que las disposiciones del artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos sobre el derecho a un juicio imparcial se aplican a los casos en que las sanciones, por su objetivo, carácter o gravedad, deben considerarse penales aun cuando se trate de una detención administrativa con arreglo al derecho interno¹.

27. El Grupo de Trabajo reitera además que las disposiciones de protección del derecho internacional de los derechos humanos deben considerarse más importantes que los argumentos de *lex specialis* del derecho internacional humanitario, en especial dadas las circunstancias del Territorio Palestino Ocupado, que ha estado bajo ocupación militar durante más de 40 años².

28. En sus observaciones finales sobre el tercer informe periódico de Israel acerca de la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Comité de Derechos Humanos expresó preocupación por el "uso frecuente y generalizado de la detención administrativa". El Comité subrayó que la detención administrativa infringía "el derecho de los detenidos a un juicio justo, en particular su derecho a ser informados sin demora, en un idioma que comprend[ieran] y en forma detallada, de la naturaleza y las causas de los cargos formulados contra ellos, a disponer del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa y comunicarse con un defensor de su elección, a estar presentes en el proceso y defenderse personalmente o mediante asistencia jurídica de su propia elección". El Comité señaló que Israel debería "abstenerse de recurrir a la detención administrativa, en particular de niños, y asegurarse de que se respet[aran] en todo momento los derechos de los detenidos a un juicio justo", y "ofrecer a los reclusos en detención administrativa rápido acceso a un abogado de su elección, informarlos inmediatamente, en un idioma que comprend[ieran], de los cargos formulados contra ellos, facilitarles información para preparar su defensa, llevarlos sin demora ante un juez y juzgarlos en su propia presencia o en presencia de su abogado" (CCPR/C/ISR/CO/3, párr. 7).

¹ Véase la observación general Nº 32 (2007) del Comité de Derechos Humanos sobre el artículo 14, relativa al derecho a un juicio imparcial y a la igualdad ante los tribunales y cortes de justicia, párr. 15.

² Véanse las opiniones del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria Nº 58/2012 (Israel), párr. 24, y Nº 5/2010 (Israel), párr. 33.

29. En sus observaciones finales sobre el cuarto informe periódico de Israel, el Comité de Derechos Humanos reiteró que seguía preocupado "por la persistencia de la práctica de la detención administrativa de palestinos; por el hecho de que, en muchos casos, la orden de detención est[uviera] fundamentada en pruebas secretas; y por que se les [negara] el acceso a un abogado, a un médico independiente y a mantener contacto con sus familiares". El Comité solicitó a Israel que "[pusiera] fin a la práctica de la detención administrativa y al uso de pruebas secretas en esos procedimientos y vel[ara] por que las personas objeto de órdenes de detención administrativa [fueran] acusadas de un delito penal, o puestas en libertad sin demora" (CCPR/C/ISR/CO/4, para. 10).

30. El Sr. Rimawi no ha sido informado en detalle sobre los motivos de su detención y no ha podido acceder a vías para impugnar la legalidad de su detención. En particular, el Sr. Rimawi no ha tenido acceso a las pruebas relacionadas con los motivos por los que se le ha privado de libertad.

31. El Grupo de Trabajo considera que se han negado al Sr. Rimawi los derechos fundamentales consagrados en los artículos 9 y 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y los artículos 9 y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Por consiguiente, su privación de libertad se inscribe en la categoría III aplicable al examen de los casos presentados al Grupo de Trabajo.

Decisión

32. En vista de lo anterior, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria emite la siguiente opinión:

La privación de libertad del Sr. Rimawi es arbitraria, por cuanto contraviene los artículos 9 y 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y los artículos 9 y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Se inscribe en la categoría III de las categorías de detención arbitraria a las que se refiere el Grupo de Trabajo cuando examina los casos que se le presentan.

33. Por consiguiente, el Grupo de Trabajo solicita al Gobierno de Israel que adopte las medidas necesarias para remediar la situación del Sr. Rimawi y ajustarla a las normas y principios establecidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

34. El Grupo de Trabajo considera que, teniendo en cuenta todas las circunstancias del caso, el remedio adecuado sería poner inmediatamente en libertad al Sr. Rimawi y concederle el derecho efectivo a obtener reparación, de conformidad con el artículo 9, párrafo 5, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

[Aprobada el 19 de noviembre de 2014]